

ORGANO LEGISLATIVO

ACUERDO

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Y
LA UNIÓN ECONÓMICA BELGO-LUXEMBURGUESA
SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA
DE INVERSIONES

ACUERDO

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Y
LA UNIÓN ECONÓMICA BELGO-LUXEMBURGUESA
SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA
DE INVERSIONES

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
por una parte,

Y

EL GOBIERNO DEL REINO DE BÉLGICA,
que obra en su nombre como en el
del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, en virtud de los acuerdos existentes,
el Gobierno Valón,
el Gobierno Flamenco,
y el Gobierno de la Región de Bruselas-Capital,
por otra parte,

(en adelante denominados las "Partes contratantes")

DESEANDO fortalecer su cooperación económica mediante la creación de condiciones favorables para la inversión de nacionales de una de las Partes contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO I Definiciones

Para la aplicación del presente Acuerdo,

1. El término "inversionistas" designa:
 - a) los "nacionales", o sea toda persona física que, de acuerdo con la legislación del Reino de Bélgica, del Gran Ducado de Luxemburgo o de la República de El Salvador se considere como ciudadano del Reino de Bélgica, del Gran Ducado de Luxemburgo o de la República de El Salvador respectivamente;

- b) - Por la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, las "sociedades", es decir toda persona moral constituida conforme a la legislación del Reino de Bélgica o del Gran ducado de Luxemburgo y que tenga su sede en el territorio del Reino de Bélgica o del Gran Ducado de Luxemburgo.
 - Para la República de El Salvador, la persona jurídica constituida conforme a la legislación de cualquier país, que fueren controladas directa o indirectamente por personas físicas de esa Parte o por personas jurídicas cuya sede se encuentre en el territorio de esa misma Parte donde la persona jurídica ejerce su actividad económica principal.
2. El término "inversiones" designa a todo elemento activo, cualquier sea éste y a toda aportación directa o indirecta en metálico, en especie o en servicios, invertida o reinvertida en un sector de actividad económica, cualquiera sea éste.

Se considera como inversiones, en el sentido del presente Acuerdo, principalmente, pero no exclusivamente a:

- a) los bienes muebles e inmuebles así como a todos los demás derechos reales tales como hipotecas, privilegios, prendas, usufructo y derechos análogos;
- b) las acciones, partes sociales y toda forma de participación, incluso minoritaria o indirecta, en las sociedades constituidas en el territorio de una de las Partes contratantes;
- c) las obligaciones, créditos y derechos de todas las prestaciones que tengan un valor económico;
- d) los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial, los procedimientos técnicos, los nombres registrados y los establecimientos mercantiles;
- e) las concesiones de derecho público o contractuales, principalmente las que se refieren a la pospección, al cultivo, la extracción o la explotación de recursos naturales.

La calificación de las inversiones en el sentido del presente Acuerdo no se verá afectada por ninguna modificación de la forma jurídica en la cual se hayan invertido o reinvertido los haberes y capitales.

3. El término "ingresos" designa a las sumas producidas por una inversión y principalmente, pero no exclusivamente, a los beneficios, intereses, incrementos de capital, dividendos, regalías o indemnizaciones.

4. El término "territorio" designa:

- El término "territorio" se aplica al territorio del Reino de Bélgica, al territorio del Gran Ducado de Luxemburgo y al territorio de la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, así como a las zonas marítimas, o sea aquellas zonas marinas o submarinas que se extienden más allá de las aguas territoriales de los Estados correspondientes y en las cuales éstos ejercen sus derechos soberanos, y su jurisdicción con fines de exploración, de explotación y de conservación de los recursos naturales, de conformidad con el derecho internacional.
- Para la República de El Salvador, "territorio" comprende, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo la soberanía de cada Parte, conforme a sus respectivas legislaciones y al derecho internacional.

ARTICULO 2

Promoción de las Inversiones

1. Cada una de las Partes contratantes fomentará las inversiones de los inversionistas de la otra Parte contratante en su territorio y aceptará tales inversiones de conformidad con su legislación.
2. En particular, cada Parte contratante autorizará la conclusión y la ejecución de contratos de licencia y de convenios de asistencia comercial, administrativa o técnica, en la medida en que estas actividades estén en relación con las inversiones.

ARTICULO 3

Protección de las inversiones

1. Todas las inversiones efectuadas por los inversionistas de una de las Partes contratantes, sean directas o indirectas, dispondrán de un trato justo y equitativo en el territorio de la otra Parte contratante.
2. A reserva de las medidas necesarias al mantenimiento del orden público, estas inversiones gozarán de constante protección y seguridad, excluyendo cualquier medida injustificada o discriminatoria que pudiera obstaculizar, de hecho o de derecho, su gestión, conservación, utilización, usufructo o su liquidación.
3. El trato y la protección, como se definen en los párrafos 1 y 2 serán al menos iguales a los que reciben los inversionistas de un tercer Estado y, en ningún caso, menos favorables que los que reconoce el derecho internacional.
4. No obstante, este trato y protección no se extienden a los privilegios que una Parte contratante otorga a los inversionistas de un tercer Estado, en virtud de su participación o de su asociación a una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común o cualquier otra forma de organización económica regional.

ARTICULO 4

Medidas privativas y restrictivas de propiedad

1. Cada Parte contratante se compromete a no adoptar ningún tipo de medida de expropiación o de nacionalización ni ninguna otra medida que tenga por efecto despojar a los inversionistas de la otra Parte contratante, directa o indirectamente, de las inversiones que les pertenezcan y que hayan sido efectuadas en su territorio.
2. En el caso de imperativos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional justifiquen una derogación del párrafo 1, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
 - a) las medidas adoptadas provendrán de un procedimiento legal;
 - b) estas medidas no serán ni discriminatorias, ni contrarias a un compromiso específico;
 - c) las medidas estarán sujetas a disposiciones en las que se prevea el pago de una indemnización adecuada y efectiva.
3. La cuantía de las indemnizaciones corresponderá al valor de mercado de las inversiones correspondientes a la víspera del día en que se hayan adoptado o se hicieran del conocimiento público.

Las indemnizaciones se pagarán en la moneda del Estado al que pertenece el inversionista o en cualquier otra moneda convertible. Estas indemnizaciones se pagarán sin demora y serán de libre transferencia. Estas devengarán interés según la tasa bancaria normal desde la fecha de su fijación hasta la fecha de su pago.

4. Los inversionistas de una de las Partes contratantes cuyas inversiones hubieran sufrido daños provocados por una guerra o cualquier conflicto armado, revolución, estado de urgencia nacional o revuelta, acaecida en el territorio de la otra Parte contratante, gozarán de un tratamiento, al menos igual al que se otorga a los inversionistas de la nación más favorecida en lo que respecta a las restituciones, indemnizaciones, compensaciones u otros resarcimientos.
5. En lo que se refiere a las materias reglamentadas por el presente artículo, cada Parte contratante otorgará a los inversionistas de la otra Parte, un trato al menos igual al que se reserva en su territorio a los inversionistas de la nación más favorecida. Este trato no será, en ningún caso, menos favorable que el que reconoce el derecho internacional.

ARTICULO 5

Transferencias

1. Cada Parte contratante otorgará a los inversionistas de la otra Parte contratante, la libre transferencia, hacia o desde su territorio, de todos los pagos relativos a una inversión, y principalmente:
 - a) de las sumas destinadas a establecer, mantener o desarrollar la inversión;

- b) de las sumas destinadas al pago de obligaciones contractuales, incluidas las sumas necesarias para el reembolso de empréstitos, las regalías y otros pagos derivados de licencias, franquicias, concesiones y otros derechos similares, así como de las remuneraciones del personal expatriado;
 - c) de las Rentas provenientes de las inversiones;
 - d) del producto de la liquidación total o parcial de las inversiones, incluyendo las plusvalías o incrementos del capital invertido;
 - e) compensaciones pagadas en cumplimiento del artículo 4.
2. Los nacionales de cada una de las Partes contratantes que han sido autorizados para trabajar en el territorio de la otra parte contratante, en conexión con una inversión, deberán también permitirse que transfiera una porción apropiada de sus ganancias al país de origen.
3. Las transferencias se efectuarán en moneda libremente convertible, al cambio aplicable en la fecha de los mismos para hacer efectiva la transacción en la moneda utilizada.
4. Cada una de las Partes contratantes proporcionará las autorizaciones que sean requeridas para asegurar que las transferencias puedan ser hechas sin atraso indebido.
- Sin ningún otro cargo adicional que los impuestos y costos usuales.
5. Las garantías referidas en este artículo deberán por lo menos ser igual a aquellas otorgadas al inversionista de la nación más favorecida.

ARTICULO 6

Subrogación

1. Si una de las partes contratantes o un organismo público perteneciente a ésta, paga indemnizaciones a sus propios inversionistas en virtud de una garantía entregada por una inversión la otra Parte contratante aceptará que los derechos y acciones de los inversionistas sean transferidos a la Parte contratante o al organismo público correspondiente.
2. En lo que respecta a la transferencia de derechos, la otra Parte contratante puede hacer valer ante el asegurador subrogado en los derechos de los inversionistas indemnizados, las obligaciones que incumben legal o contractualmente a estos últimos.

ARTICULO 7

Regulaciones aplicables

Cuando un asunto relativo a las inversiones está regido a la vez por el presente Acuerdos por la legislación nacional de una de las Partes contratantes o por convenciones internacionales existentes o a ser suscritas por las Partes en el futuro, los inversionistas de la otra Parte Contratante tendrán derecho a Beneficiarse de las disposiciones que son más favorables a ellos.

ARTICULO 8

Acuerdos particulares

1. Las inversiones efectuadas por medio de un acuerdo particular entre una de las Partes contratantes e inversionistas de la otra Parte se regirán por las disposiciones del presente Acuerdo y por las de este Acuerdo particular.
2. Cada una de las Partes contratantes garantizará en todo momento el respeto de los compromisos adquiridos asumidos con los inversionistas de la otra Parte contratante.

ARTICULO 9

Solución de Litigios relativo a las inversiones

1. Cualquier litigio de inversión entre un inversionista de una Parte contratante y la otra Parte contratante deberá ser notificado por escrito por la primera Parte contratante que tome acción. La notificación deberá ser acompañada de un memorándum suficientemente detallado. En la medida de lo posible, las Partes intentarán llegar a un arreglo amistoso para resolver el litigio mediante la negociación, recurriendo eventualmente al Consejo de un experto de una tercera Parte, o mediante la conciliación entre las Partes contratantes a través del canal diplomático.
2. En ausencia de una solución amigable del conflicto mediante la resolución directa del mismo entre las Partes en conflicto o por intermedio de la conciliación por vía diplomática, en un plazo de seis meses a partir de su notificación, el litigio será sometido, según lo decida el inversionista, sea a la jurisdicción competente del Estado en el que se ha efectuado la inversión, o al arbitraje internacional. Para tal fin, cada una de las Partes contratantes dará su consentimiento con anticipación e irrevocable, para que cualquier litigio sea sometido a este arbitraje. Dicho consentimiento implica que ambas Partes renuncian a exigir que se agoten en primer lugar los recursos administrativos o judiciales internos.
3. En caso de recurrir al arbitraje internacional para resolver un litigio, éste deberá ser sometido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por la "Convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a firma en Washington, el 18 de marzo de 1965.
4. Las Partes contratantes comprometidas en un litigio no podrán poner reparos en ninguna de las etapas del procedimiento de arbitraje o de la ejecución de una sentencia de arbitraje, por el hecho de que el inversionista, parte adversa en un Litigio, haya percibido una indemnización que cubra total o parcialmente sus pérdidas, en cumplimiento de una póliza de seguros o de la garantía proveída en el artículo 6 del presente Acuerdo.
5. El tribunal arbitral adoptará una resolución en virtud del derecho interno de la Parte contratante comprometida como tal en un litigio en el territorio en el cual se ha efectuado la inversión, teniendo en cuenta las disposiciones relativas a los conflictos de ley, las disposiciones del presente Acuerdo, los términos del acuerdo particular que hubiera intervenido respecto a la inversión, así como los principios del derecho internacional.

6. Las sentencias de arbitraje son definitivas y obligatorias para las partes comprometidas en un litigio. Cada Parte contratante se compromete a cumplir las sentencias conforme a su legislación nacional.

ARTICULO 10**Nación más favorecida**

En todos los asuntos relacionados al tratamiento de inversiones, los inversionistas de cada Parte contratante deberán gozar del tratamiento de nación más favorecida en el territorio de la otra Parte contratante.

ARTICULO 11

Controversias de interpretación o de aplicación entre las Partes contratantes.

1. Cualquier disputa surgida en torno a la interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo, deberá resolverse, si es posible, por vía diplomática.
2. En ausencia de una solución a través de los canales diplomáticos, la disputa deberá someterse a una comisión mixta, compuesta por representantes de las dos partes; esta comisión se reunirá a petición de la Parte contratante que tome acción y sin demora injustificada.
3. Si la comisión mixta no consigue resolver la disputa, ésta tendrá que someterse a petición de una u otra de las Partes contratantes a un procedimiento de arbitraje establecido para cada caso en particular, de la siguiente manera:

Cada Parte contratante designará un árbitro dentro de un plazo de dos meses, a partir de la fecha en la que una de las Partes contratantes puso en conocimiento de la otra de su intención de someter la disputa a arbitraje. Dentro de los dos meses posteriores a la designación, los dos árbitros designan de común acuerdo a un nacional de un tercer Estado, como Presidente de la Corte Arbitral.

Si no se respetaran estos plazos, cualquiera de las Partes contratantes podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que proceda a la nominación del o de los árbitros no designados.

Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia es un nacional de una u otra Parte contratante o de un Estado con el cual las Partes contratantes no mantienen Relaciones diplomáticas, o si, por una u otra razón, tiene un impedimento para ejercer esta función, el Vice-Presidente de la Corte Internacional de Justicia será invitado a efectuar dicha nominación.

4. La Corte Arbitral, una vez constituida, determinará sus reglas de procedimiento. Sus decisiones serán adoptadas por mayoría de votos; éstas serán definitivas y obligatorias para las Partes contratantes.
5. Cada Parte contratante asumirá los gastos derivados de la designación de su árbitro.

Los desembolsos inherentes a la designación del tercer árbitro y los gastos de funcionamiento de la Corte Arbitral serán asumidos, en partes iguales, por las Partes contratantes.

ARTICULO 12**Inversiones previas**

El presente Acuerdo se aplica igualmente a las inversiones efectuadas antes de su puesta en aplicación, por los inversionistas, de una de las Partes contratantes en el territorio de la otra Parte contratante, de conformidad a sus leyes y reglamentos.

ARTICULO 13.**Entrada en vigor y duración.**

1. El presente Acuerdo entrará en vigor un mes después, de la fecha del intercambio de instrumentos de ratificación por las Partes contratantes. El Acuerdo estará vigente por un período de diez años.
A menos que cualquiera de las Partes contratantes lo denuncie, por lo menos seis meses antes de la expiración de su período de validez, éste será cada vez tácitamente prorrogado por un nuevo período de diez años. Cada Parte contratante se reserva el derecho de denunciar el Acuerdo mediante notificación que deberá introducirse al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento del período de validez en curso.
2. Las inversiones que se hayan efectuado con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente Acuerdo seguirán supeditadas al mismo durante un período de diez años a partir de la fecha de terminación.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los representantes infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

FIRMADO EN Bruselas el 12 de octubre de 1999, en dos ejemplares originales, cada uno en lengua francesa, neerlandesa y en lengua española, todos los textos siendo igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE EL SALVADOR:

S.E. Lic. María Eugenia Brizuela de Avila,
Ministra de Relaciones Exteriores.

Por el Gobierno del Reino de Bélgica
que obra tanto en su nombre como
en el Gobierno del Gran Ducado de
Luxemburgo.

Louis MICHEL,
Viceprimer Ministro de Asuntos Exteriores.

POR LA UNION ECONOMICA
BELGO-LUXEMBURGUESA:

ACCORD**ENTRE****LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'EL SALVADOR****ET****L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE****CONCERNANT****L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES****DES INVESTISSEMENTS****ACCORD****ENTRE****LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'EL SALVADOR****ET****L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE****CONCERNANT****L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES****DES INVESTISSEMENTS****LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'EL SALVADOR,**
d'une part**et****LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,**
agissant tant en son nom qu'au nom du
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
le Gouvernement wallon,
le Gouvernement flamand,
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
d'autre part**("ci-après dénommés les "Parties contractantes")****DESIREUX** de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,**SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :**

ARTICLE 1

Définitions

Pour l'application du présent Accord,

1. Le terme "investisseurs" désigne :

- a) les "nationaux" c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'El Salvador est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'El Salvador respectivement ;
 - b) - Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg.
 - Pour la République d'El Salvador, les personnes juridiques constituées conformément à la législation de n'importe quel pays et contrôlées directement ou indirectement par des personnes physiques de cette Partie ou par des personnes juridiques dont le siège se trouve sur le territoire de cette Partie où la personne juridique exerce son activité économique principale.
2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :

- a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, priviléges, gages, usufruit et droits analogues ;
- b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
- c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique ;
- d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce ;
- e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord.

3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.
4. Le terme "territoire" désigne :
 - Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquels celui-ci exerce, conformément au droit International ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.
 - Pour la République d'El Salvador, l'espace terrestre, maritime et aérien soumis à la souveraineté de chaque Partie, conformément aux législations respectives et au droit international.

ARTICLE 2

Promotion des investissements

1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa législation.
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.

ARTICLE 3

Protection des investissements

1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité, et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.
3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.
4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux priviléges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes autres formes d'organisations économiques régionales.

ARTICLE 4

Mesures privatives et restrictives de propriété

1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies
 - a) les mesures sont prises selon une procédure légale ;
 - b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique ;
 - c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur du marché des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques.

Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux bancaire normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement.

4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.
5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

ARTICLE 5

Transferts

1. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, le libre transfert, vers ou à partir de son territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment :
 - a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement ;
 - b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les royalties et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié ;

- c) des revenus des investissements ;
 - d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi ;
 - e) des indemnités payées en exécution de l'article 4.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
 3. Les transferts sont effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.
 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.
 5. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 6

Subrogation

1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits et actions des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou l'organisme public concerné.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers.

ARTICLE 7

Règles applicables

Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

ARTICLE 8

Accords particuliers

1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.
2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 9

Règlement de différends relatifs aux investissements

1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente.

Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend à l'amiable par la négociation, en ayant éventuellement recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par voie diplomatique.

2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat ou l'investissement a été fait, soit à l'arbitrage international.

A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger que soient épousés en premier lieu les recours administratifs ou judiciaires internes.

3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par "la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965.
4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulevera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.
5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit interne de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est située, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.

6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

ARTICLE 10

Nation la plus favorisée

Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 11

Différends d'interprétation ou d'application entre les Parties contractantes

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties ; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante :

Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination.

4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix ; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

ARTICLE 12

Investissements antérieurs

Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués, avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité de ses lois et règlements.

ARTICLE 13

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.

2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 12 octobre 1999, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise et espagnole, tous les textes faisant également foi.

**POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE D'EL SALVADOR :**

**S.E. Lic. María Eugenia Brizuela de Avila,
Ministre des Relations extérieures**

**POUR L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE :
Pour le Gouvernement du Royaume de
Belgique,
agissant tant en son nom qu'au nom
du Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg :**

**Louis MICHEL,
Vice-Premier Ministre et Ministre des
Affaires étrangères**

Pour le Gouvernement wallon :

Pour le Gouvernement flamand :

**Pour le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale :**

OVEREENKOMST

TUSSEN

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK EL SALVADOR

EN

DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

INZAKE

DE WEDERZIJDSE BEVORDERING EN BESCHERMING

VAN INVESTERINGEN

OVEREENKOMST

TUSSEN

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK EL SALVADOR

EN

DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

INZAKE

DE WEDERZIJDSE BEVORDERING EN BESCHERMING

VAN INVESTERINGEN

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK EL SALVADOR,
anderzijds

en

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIË,
handelend mede in de naam van
de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, krachtens bestaande
overeenkomsten,
de Vlaamse Regering,
de Waalse Regering,
en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
anderzijds

(hierna te noemen de "Overeenkomstsluitende Partijen")

VERLANGENDE hun economische samenwerking te versterken door het scheppen van
gunstige voorwaarden voor de verwesenlijking van investeringen door onderdanen van één
der Overeenkomstsluitende Partijen op het grondgebied van de andere
Overeenkomstsluitende Partij,

ZIJN OVEREENGEGOMEN ALS VOLGT :

ARTIKEL 1

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Overeenkomst,

1. Beteekt het begrip "investeerders" :
 - a) de "onderdanen", dit wil zeggen elke natuurlijke persoon die, volgens de wetgeving van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg of van de Republiek El Salvador beschouwd wordt als onderdaan van respectievelijk het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg of van de Republiek El Salvador ;
 - b) - Voor de Belgisch-Luxemburgs Economisch Unie, de "vennootschappen", dit wil zeggen elke rechtspersoon die is opgericht overeenkomstig de wetgeving van het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg en die zijn maatschappelijke zetel heeft op het grondgebied van respectievelijk het Koninkrijk België of het Groothertogdom Luxemburg.
- Voor de Republiek El Salvador, de rechtspersonen opgericht overeenkomstig de wetgeving van om het even welk land en rechtsstreeks of onrechtsstreeks onder de controle van natuurlijke personen van deze Partij of van rechtspersonen waarvan de zetel zich bevindt op het territorium van deze Partijen waar de juridische persoon zijn belangrijkste economische activiteit uitoefent.
2. Beteekt het begrip "investering" om het even welke vorm van activa en elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng in speciën, natura of diensten, die worden geïnvesteerd of geherinvesteerd in om het even welke economische sector.

Als investeringen in de zin van deze Overeenkomst gelden meer bepaald, maar niet uitsluitend :

- a) de roerende en onroerende goederen alsook alle andere zakelijke rechten, zoals hypotheken, voorrechten, panden, vruchtgebruik en gelijkaardige rechten ;
- b) de aandelen, deelbewijzen en alle andere vormen van deelneming, zelfs minoritair of onrechtstreeks, in vennootschappen die zijn opgericht op het grondgebied van één der Overeenkomstsluitende Partijen ;
- c) de obligaties, vorderingen en rechten op enige prestatie met economische waarde ;
- d) de auteursrechten, rechten van industriële eigendom, technische procédés, gedeponeerde namen en handelsfondsen ;
- e) de publiekrechtelijke of contractuele concessies, waaronder die betreffende de prospectie, de teelt, de ontginding of winning van natuurlijke rijkdommen.

Geen enkele verandering in de juridische vorm waarin de activa en kapitalen werden geïnvesteerd of gcherinvesteerd brengt hun kwalificatie als "investering" als bedoeld in deze Overeenkomst in het gedrang.

Betekent het begrip "inkomsten" de bedragen die voortvloeien uit een investering, en namelijk maar niet uitsluitend, de winsten, intresten, kapitaalaangroei, dividenden, royalties of vergoedingen.

Betekent de term "grondgebied":

- voor de Belgisch-Luxemburgs Economische Unie, het territorium van het Koninkrijk België en het territorium van het Groothertogdom Luxemburg evenals de maritieme gebieden, met name de gebieden op en onder zee, die zich voorbij de territoriale wateren van de betrokken Staat uitstrekken en op dewelke deze, overeenkomstig het internationaal recht, zijn soevereine rechten en zijn rechtsmacht uitoefent met het oog op het onderzoek, de ontginning en het behoud van de natuurlijke rijkdommen.

voor de Republiek El Salvador, het grondgebied, het maritieme en luchtgebied onderworpen aan de soevereiniteit van elke Partij in overeenstemming met de respectieve wetgevingen en met het internationaal recht.

ARTIKEL 2

Bevordering van investeringen

1. Elke Overeenkomstsluitende Partij moedigt investeringen op haar grondgebied door investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij aan en laat deze investeringen toe in overeenstemming met haar wetgeving.
2. Elke Overeenkomstsluitende Partij laat in het bijzonder het sluiten en uitvoeren toe van licentiecontracten en van overeenkomsten inzake commerciële, administratieve of technische bijstand, voor zover deze activiteiten verband houden met investeringen.

ARTIKEL 3

Bescherming van de investeringen

1. Alle rechtstreekse en onrechtstreekse investeringen uitgevoerd door investeerders van één der Overeenkomstsluitende Partijen genieten op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij een billijke en rechtvaardige behandeling.

2. Onder voorbehoud van maatregelen noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde, genieten die investeringen een voortdurende veiligheid en bescherming, met uitsluiting van elke ongerechtvaardigde of discriminatoire maatregel die, in rechte of in feite, het beheer, de instandhouding, het gebruik, het genot of de vereffening ervan zou kunnen belemmeren.
3. De in de paragrafen 1 en 2 omschreven behandeling en bescherming zijn ten minste gelijk aan die welke de investeerders van een derde Staat genieten en zijn in geen geval minder gunstig dan die welke het internationaal recht waarborgt.
4. Die behandeling en bescherming strekken zich evenwel niet uit tot de voorrechten die een Overeenkomstsluitende Partij toekent aan investeerders van een derde Staat, op grond van haar lidmaatschap van of associatie met een vrijhandelszone, een douane-unic, een gemeenschappelijke markt of iedere andere vorm van regionale economische organisatie.

ARTIKEL 4

Eigendomsberovende of -beperkende maatregelen

1. Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich ertoe geen enkele maatregel tot onteigening of nationalisatie te treffen, noch enige andere maatregel die tot gevolg heeft dat de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij rechtstreeks of onrechtstreeks het bezit ontnomen wordt van de investeringen die hen toebehoren op haar grondgebied.
2. Wanneer een afwijking van paragraaf 1 wordt gerechtvaardigd door het openbaar nut, de veiligheid of het nationaal belang, dan moeten de volgende voorwaarden vervuld worden :
 - a) de maatregelen worden genomen volgens een wettelijke procedure ;
 - b) ze zijn noch discriminatoir, noch strijdig met een bijzondere verbintenis ;
 - c) ze gaan vergezeld van maatregelen die voorzien in de betaling van een gepaste en effectieve schadevergoeding.
3. Het bedrag van de schadevergoedingen moet overeenstemmen met de marktwaarde van de betrokken investeringen op de dag voor de datum waarop de maatregelen worden getroffen of bekendgemaakt.

De schadevergoedingen worden betaald in de munt van de Staat waartoe de investeerder behoort of in een andere convertibele munt. Ze worden zonder vertraging uitgekeerd en kunnen vrij worden overgemaakt. Ze brengen rente op aan het normale banktarief vanaf de datum van hun vaststelling tot aan deze van hun betaling.

4. De investeerders van één der Overeenkomstsluitende Partijen waarvan de investeringen schade zouden lijden ingevolge een oorlog of een ander gewapend conflict, een revolutie, een nationale noodtoestand of een opstand op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, genieten vanwege die laatste een behandeling die ten minste gelijk is aan die welke aan investeerders van de meest begunstigde natie wordt verleend voor wat de teruggaven, schadeloosstellingen, compensaties of andere schadevergoedingen betreft.
5. Voor de in dit artikel behandelde kwesties zal elke Overeenkomstsluitende Partij aan de investeerders van de andere Partij een behandeling verlenen die ten minste gelijk is aan die welke ze op haar grondgebied geeft aan de investeerders van de meest begunstigde natie. Die behandeling zal in geen geval minder gunstig zijn dan die welke het internationaal recht waarborgt.

ARTIKEL 5

Overmakingen

1. Elke Overeenkomstsluitende Partij verleent aan de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij, de vrije overmaking naar of vanuit haar grondgebied, van alle betalingen inzake een investering, en meer bepaald van :
 - a) bedragen bestemd om een investering tot stand te brengen, te behouden of te ontwikkelen ;
 - b) bedragen bestemd voor de betaling van contractuele verplichtingen, inbegrepen de bedragen die nodig zijn voor de terugbetaling van leningen, royalties en andere betalingen ingevolge licenties, franchising, concessies en andere gelijkaardige rechten, evenals de vergoeding van geëxpatrieerde werknemers ;
 - c) de opbrengsten van investeringen ;
 - d) de opbrengst van de volledige of gedeeltelijke vereffening van investeringen, inbegrepen de meerwaarden of verhogingen van geïnvesteerd kapitaal ;
 - e) de ingevolge artikel 4 betaalde schadevergoedingen.
2. De onderdanen van elk der Overeenkomstsluitende Partijen die uit hoofde van een investering op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij mogen werken, mogen tevens een passend deel van hun loon overmaken naar hun land van oorsprong.
3. De overmakingen gebeuren in een vrijelijk omwisselbare munt, tegen de koers die op de datum ervan van toepassing is op de contanttransacties in de gebruikte munt.
4. Elk der Overeenkomstsluitende Partijen levert de nodige vergunningen af om ervoor te zorgen dat de overmakingen zonder vertraging kunnen gebeuren, zonder andere onkosten dan de gebruikelijke taksen en kosten.
5. De in dit artikel vermelde waarborgen zijn ten minste gelijk aan die welke worden gegeven aan de investeerders van de meest begunstigde natie.

ARTIKEL 6

Subrogatie

1. Indien één der Overeenkomstsluitende Partijen of een openbare instelling ervan schadevergoedingen uitbetaalt aan haar eigen investeerders op grond van een garantie voor een investering, dan erkent de andere Overeenkomstsluitende Partij dat de rechten en vorderingen van de investeerders zijn overgedragen aan de betrokken Overeenkomstsluitende Partij of openbare instelling.
2. In verband met de overgedragen rechten kan de andere Overeenkomstsluitende Partij aan de verzekeraar die in de rechten van de schadeloosgestelde investeerder is getreden, de verplichtingen opleggen die wettelijk of contractueel op die investeerder rusten.

ARTIKEL 7

Toepasbare regels

Als een kwestie in verband met investeringen tegelijk wordt geregeld door deze Overeenkomst, maar ook door de nationale wetgeving van één der Overeenkomstsluitende Partijen, of door bestaande internationale overeenkomsten of overeenkomsten die door de Partijen in de toekomst zullen ondertekend worden, dan kunnen de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij zich beroepen op de bepalingen die voor hen het gunstigst zijn.

ARTIKEL 8

Bijzondere overeenkomsten

1. Investeringen waarvoor een bijzondere overeenkomst werd gesloten tussen één der Overeenkomstsluitende Partijen en investeerders van de andere Partij, zijn onderworpen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en aan die van de bijzondere overeenkomst.
2. Elk der Overeenkomstsluitende Partijen leeft steeds de verbintenissen na die ze tegenover investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij is aangegaan.

ARTIKEL 9

Regeling van geschillen met betrekking tot de investeringen

1. Van elk investeringsgeshil tussen een investeerder van één der Overeenkomstsluitende Partijen en de andere Overeenkomstsluitende Partij wordt door de meest gerechte partij schriftelijk kennis gegeven, vergezeld van een voldoende gedetailleerd memorandum.

In de mate van het mogelijke zullen de partijen proberen dat geschil op minnelijke wijze te regelen door middel van onderhandelingen, eventueel door beroep te doen op een onderzoek van een derde, of anders door een verzoeningsprocedure tussen de Overeenkomstsluitende Partijen langs diplomatieke weg.

2. Wanneer er geen minnelijke schikking getroffen werd door een rechtstreeks akkoord tussen de partijen die bij het geschil betrokken zijn, noch verzoening bereikt werd langs diplomatieke weg binnen zes maanden na de kennisgeving, dan wordt het geschil, naar de keuze van de investeerder, ofwel aan de bevoegde rechtsmacht van de Staat waar de investering gedaan werd, ofwel aan internationale arbitrage, onderworpen.

Met dat doel geeft elk der Overeenkomstsluitende Partijen haar voorafgaande en onherroepelijke toestemming om elk geschil aan dergelijke arbitrage te onderwerpen. Die toestemming houdt in dat ze niet zullen eisen dat eerst de interne administratieve of juridische procedures worden uitgeput.

3. Als internationale arbitrage wordt gevraagd, wordt het geschil voorgelegd aan het Internationaal Centrum voor Regeling van Investeringsgeschillen (I.C.S.I.D.), dat werd opgericht door het "Verdrag tot regeling van investeringsgeschillen tussen Staten en onderdanen van andere Staten", ter ondertekening opgesteld te Washington op 18 maart 1965.
4. Geen van de Overeenkomstsluitende Partijen, die betrokken is bij een geschil, zal in enig stadium van de arbitrageprocedure of van de uitvoering van een scheidsrechterlijke uitspraak, als verweer aanvoeren dat de investeerder die tegenpartij is bij het geschil, een vergoeding ter uitvoering van een verzekeringspolis of van de in artikel 6 van deze Overeenkomst vermelde garantie heeft ontvangen, die het geheel of een gedeelte van zijn verliezen dekt.
5. De arbitragerechtbank zal beslissen op grond van het nationale recht van de Overeenkomstsluitende Partij die partij is bij het geschil en op het grondgebied van dewelke de investering gesitueerd is, met inbegrip van de regels inzake wetsconflicten, de bepalingen van deze Overeenkomst, de bepalingen van de bijzondere overeenkomst die eventueel werd gesloten met betrekking tot de investering, en de beginselen van internationaal recht.
6. De arbitragebeslissingen zijn definitief en bindend voor de partijen bij het geschil. Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich ertoe ze uit te voeren overeenkomstig haar nationale wetgeving.

ARTIKEL 10

Meest begunstigde Natie

Voor alle kwesties met betrekking tot de behandeling van investeringen, genieten de investeerders van elk der Overeenkomstsluitende Partijen op het grondgebied van de andere Partij, de behandeling van de meest begunstigde natie.

ARTIKEL 11

Geschillen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen inzake interpretatie of toepassing

1. Elk geschil betreffende de interpretatie of de toepassing van deze Overeenkomst moet, indien mogelijk, worden geregeld langs diplomatieke weg.
2. Bij gebrek aan een regeling langs diplomatieke weg wordt het geschil voorgelegd aan een gemengde commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van beide Partijen ; die commissie vergadert op verzoek van de meest gerede Partij en zonder ongerechtvaardigde vertraging.
3. Indien de gemengde commissie het geschil niet kan regelen, wordt het op verzoek van de één of de andere Overeenkomstsluitende Partij onderworpen aan een arbitrageprocedure, die voor elk geval apart als volgt wordt ingesteld :

Elke Overeenkomstsluitende Partij zal een scheidsrechter aanwijzen binnen een periode van twee maanden vanaf de datum waarop één der Overeenkomstsluitende Partijen de andere in kennis heeft gesteld van haar voornemen het geschil aan arbitrage te onderwerpen. Binnen twee maanden na hun aanstelling duiden deze twee scheidsrechters in onderling overleg een onderdaan van een derde Staat aan als voorzitter van het college van scheidsrechters.

Indien deze termijnen niet worden nageleefd, zal de één of de andere Overeenkomstsluitende Partij de Voorzitter van het Internationaal Gerechtshof verzoeken de benoeming te doen van de niet-aangewezen scheidsrechter of scheidsrechters.

Indien de Voorzitter van het Internationaal Gerechtshof onderdaan is van de één of de andere Overeenkomstsluitende Partij of van een Staat waarmee de één of de andere Overeenkomstsluitende Partij geen diplomatieke betrekkingen heeft, of als hij om een andere reden zijn functie niet kan uitoefenen, wordt de Ondervoorzitter van het Internationaal Gerechtshof verzocht die benoeming te doen.

4. Het aldus samengestelde college stelt zijn eigen procedureregels vast. Zijn beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen ; ze zijn definitief en bindend voor de Overeenkomstsluitende Partijen.
5. Elke Overeenkomstsluitende Partij zal de kosten die zijn verbonden aan de aanwijzing van haar scheidsrechter dragen. De uitgaven met betrekking tot de aanwijzing van de derde scheidsrechter en de werkingskosten van het college worden gelijkelijk gedragen door de Overeenkomstsluitende Partijen.

ARTIKEL 12

Vroegere investeringen

Deze Overeenkomst is eveneens van toepassing op de voor zijn inwerkingtreding uitgevoerde investeringen, verricht door investeerders van één der Overeenkomstsluitende Partijen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, en dit in overeenstemming met haar wetten en reglementen.

ARTIKEL 13

Inwerkingtreding en duur

1. Deze Overeenkomst treedt in werking één maand na de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen hun akten van bekrachtiging hebben uitgewisseld. Ze blijft van kracht gedurende een termijn van tien jaar.

Tenzij één der Overeenkomstsluitende Partijen ze ten minste zes maanden voor het einde van de geldigheidstermijn opzegt, wordt ze telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuwe termijn van tien jaar, en elke Overeenkomstsluitende Partij behoudt zich het recht ze op te zeggen met kennisgeving ten minste zes maanden voor het einde van de lopende geldigheidstermijn.

2. Investeringen die voor de datum van beëindiging van deze Overeenkomst werden verricht, blijven onder haar toepassing vallen gedurende een termijn van tien jaar na die datum.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, op 12 oktober 1999, in twee oorspronkelijke exemplaren, elk in de Nederlandse, Franse en de Spaanse taal, alle teksten gelijkelijk rechtsgeldig.

**VOOR DE REGERING VAN DE
REPUBLIEK EL SALVADOR :**

**Z.E. Lic. María Eugenia Brizuela de Avila,
Minister voor Buitenlandse Betrekkingen**

**VOOR DE BELGISCH-
LUXEMBURGSE ECONOMISCHE
UNIE :**

**Voor de Regering van het Koninkrijk
België,
handelend mede in de naam van
de Regering van het Groothertogdom
Luxemburg :**

**Louis Michel,
Vice-Eerste Minister en Minister van
Buitenlandse Zaken**

Voor de Vlaamse Regering :

ACUERDO N° 70.

San Salvador, 19 de enero de 2000.

Visto el Acuerdo entre el Gobierno de la República de El Salvador y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito el 12 de octubre de 1999, el cual consta de Un Preámbulo y Trece Artículos, en nombre y representación del Gobierno de El Salvador, por la suscrita, y en nombre y representación de la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, por el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Louis Michel, en nombre y representación del Gobierno Valón, por su representante debidamente autorizado, en nombre y representación del Gobierno de la Región de Bruselas-Capital, por su representante debidamente autorizado; el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, ACUERDA: a) Aprobalo en todas sus partes y b) Someterlo a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa para que si lo tiene a bien se sirva otorgarle su ratificación.- COMUNIQUESE.- La Ministra de Relaciones Exteriores, Brizuela de Ávila.

DECRETO N° 845.**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,****CONSIDERANDO:**

- I.- Que el Acuerdo entre el Gobierno de la República de El Salvador y la Unión Belgo-Luxemburguesa sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el cual consta de Un Preámbulo y Trece Artículos, fue suscrito el 12 de octubre de 1999, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, por la Ministra de Relaciones Exteriores, Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila; y, en nombre y representación de la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, por el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Don Louis Michel; y en nombre y representación de los Gobiernos Valón, Flamenco y de la Región de Bruselas-Capital, por sus representantes debidamente autorizados;
- II.- Que con este Acuerdo, se logrará disponer de un trato justo y equitativo en el territorio de cada una de las Partes, a reserva de las medidas necesarias al mantenimiento del orden público, gozando los inversionistas de constante protección y seguridad, excluyendo cualquier medida injustificada o discriminatoria que pudiera obstaculizar, de hecho o de derecho, su gestión, conservación, utilización, usufructo o liquidación;
- III.- Que el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, aprobó este Acuerdo, por medio del Acuerdo No. 70 de fecha 19 de enero del presente año y no contiene ninguna disposición contraria a la Constitución, por lo que es procedente su ratificación;

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Relaciones Exteriores y de conformidad al Art. 131 ordinal 7º de la Constitución, en relación con el Art. 168 ordinal 4º de la misma,

DECRETA:

Art. 1.- Ratificase en todas sus partes el Acuerdo entre el Gobierno de la República de El Salvador y la Unión Belgo-Luxemburguesa sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el cual consta de Un Preámbulo y Trece Artículos, suscrito el 12 de octubre de 1999, en nombre y representación del Gobierno de la República de El Salvador, por la Ministra de Relaciones Exteriores, Licenciada María Eugenia Brizuela de Ávila; y, en nombre y representación de la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, por el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Don Louis Michel; y en nombre y representación de los Gobiernos Valón, Flamenco y de la Región de Bruselas-Capital, por sus representantes debidamente autorizados; aprobado por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores, mediante Acuerdo No. 70 de fecha 19 de enero del presente año.

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diecisés días del mes de febrero del año dos mil.

JUAN DUCH MARTINEZ,
PRESIDENTE.

GERSON MARTINEZ,
PRIMER VICEPRESIDENTE.

CIRO CRUZ ZEPEDA,
SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

RONAL UMAÑA,
TERCER VICEPRESIDENTE.

NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,
CUARTA VICEPRESIDENTA.

JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
PRIMER SECRETARIO.

JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
SEGUNDO SECRETARIO.

ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
TERCER SECRETARIO.

GERARDO ANTONIO SUVILLAGA GARCIA,
CUARTO SECRETARIO.

ELVIA VIOLETA MENJIVAR,
QUINTA SECRETARIA.

JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ,
SEXTO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil.

PUBLIQUESE,

FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ,
Presidente de la República.

HECTOR MIGUEL DADA SANCHEZ,
Viceministro de Relaciones Exteriores.